

Indicador Político

■ Narcofranja priista en Norte

■ Los narcos... también votan

Carlos Ramírez

Entre si fue el narcohuevo o la narcogallina, el caso es que el narcotráfico nació y se consolidó en los años del PRI en el poder y la contabilidad de estados dominados por el narco es ilustrativa: diez entidades gobernadas por priistas, contra apenas tres perredistas y uno panista.

Y si Estados Unidos comienza a preparar sus fuerzas armadas para combatir al narco en el sur de su frontera, resulta que existe una especie de *narcofranja* en la frontera México-EU con cinco entidades gobernadas por el PRI: Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Durango y Sonora padecen el flagelo del narco. Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, municipios priistas, exhiben la hegemonía del narcotráfico.

Tres entidades perredistas están contaminadas por el narco —Guerrero, Michoacán y el DF— y una (Jalisco) está en poder del PAN desde hace dos sexenios. Pero hay algunos datos: Guerrero perdió la batalla contra el narco ya con el gobierno perredista de Zeferino Torreblanca, Michoacán comenzó a contaminarse con los últimos gobiernos priistas y el DF inició su descomposición durante el gobierno priista-salinista de Manuel Camacho, con el dato adicional de que el jefe policiaco de entonces, Santiago Tapia, atrapó y dejó escapar a *El Chapo* Guzmán a cambio de dinero; el entonces secretario de gobierno y coordinador de la policía era Marcelo Ebrard; Tapia aceptó el soborno y fue encarcelado.

La primera denuncia contra el avance del narcotráfico en el país ocurrió en abril de 1984, con un desplegado de los obispos católicos del sur de la República. El documento fue catapultado por el columnista Manuel Buendía y las pistas llevaron a la responsabilidad de funcionarios y políticos priistas. Buendía fue

asesinado cuando se disponía a dar nombres de políticos y policías involucrados en el narcotráfico.

En 1985 volvió a ponerse de moda el narcotráfico. El agente de la DEA Enrique Camarena Salazar fue secuestrado, torturado y asesinado por capos del narcotráfico. Información divulgada por el embajador estadounidense John Gavin reveló que la policía judicial federal y agentes de la dirección federal de seguridad —la primera de la PGR y la segunda de la Secretaría de Gobernación— protegían cargamentos de droga. En 1985 se reveló la existencia del rancho *El Búfalo*, donde había miles de campesinos sembrando droga.

La investigación de entonces mostró que Rafael Caro Quintero portaba una credencial oficial de la Federal de Seguridad y otros narcos de la judicial federal. Las credenciales de la DFS —la policía política del Estado— estaban firmadas por su titular José Antonio Zorrilla Pérez y por el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz. Bartlett

alegó que Zorrilla pertenecía al grupo de Fernando Gutiérrez Barrios, el todopoderoso jefe de la policía política, pero luego Miguel de la Madrid aclaró que Zorrilla dependía directamente de Bartlett. Las investigaciones contra Zorrilla por el asesinato de Buendía y su apoyo al narco nunca llegaron a Bartlett.

En los ochenta y noventa, dos estados fueron la sede del narco: Jalisco y Sinaloa, entonces gobernados por el PRI. Tijuana, también priista, fue tomada por las mafias. Luego se agregaría Chihuahua durante los gobiernos priistas y el narco se reforzó durante la gestión panista de Francisco Barrio. Ciudad Juárez se transformó en el *narcomunicipio* por excelencia con el panismo y el priismo. El anterior secretario priista de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Juárez está preso por traficar toneladas de marihuana.

Chihuahua volvió a mostrar el colapso político de los gobiernos. De la *narcofranja* del norte, de Tamaulipas a Tijuana, sólo se salva Coahuila. Pero Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Durango y Sinaloa tienen gobiernos priistas. Y como dato adicional, los encargados de la estrategia de seguridad pública civil contra el narco tienen un origen priista.

Por tanto, el PRI como partido tiene —o debiera tener— una responsabilidad



Fecha 25.02.2009	Sección Política	Página 30
---------------------	---------------------	--------------

en la comprensión del fenómeno del narcotráfico. En todo caso, los gobiernos panistas deben de asumir su propia carga de resultados escasos frente al problema. Y sobre todo, la falta de decisión para formar sus propios cuadros de seguridad, quizá por la percepción panista de que los priistas dejaron crecer el problema y por tanto ellos, aun en los gobiernos panistas, deben de tomar las decisiones para derrotar al crimen organizado.

Lo malo es el oportunismo. Sin tener datos coherentes sobre el incidente contra el gobernador priista José Reyes Baeza, el diputado priista César Duarte —presidente de la Cámara de Diputados— salió en defensa de su compañero de sector y de partido y atacó al gobierno federal. Sólo que con las circunstancias agravantes de que el propio gobernador ya había desinflado la nota al señalar que fue un incidente callejero y no un atentado y de que Duarte es... precandidato del PRI a la gubernatura de Chihuahua.

El problema radica en descargar toda la

responsabilidad en el gobierno federal. Pero los gobiernos estatales y municipales dejaron crecer el problema. El gobierno federal y el ejército llegaron a las zonas del narco cuando ya estaban corroídas y cuando sus fuerzas de seguridad estatales y municipales ya habían sido tomadas por el narco.

Lo que queda en el fondo sería aclarar la maniobra electoral: dejar solos al gobierno federal panista y al ejército para cargar con el desprestigio, y permitir al PRI que recupere votos sin responder a la realidad de que el narco tuvo su auge en el periodo priista 1983-2000. ☒

*El gobierno federal y
el ejército llegaron a
las zonas del narco
cuando ya estaban
corroídas y cuando
sus fuerzas de
seguridad estatales y
municipales ya
habían sido tomadas
por el narco*

www.indicadorpolitico.com.mx
cramirez@indicadorpolitico.com.mx